

llo Director del camino nacional de Amozoc á Veracruz y contra otros empleados de esa Direccion, por haber tapado una zanja que en el rancho del Záfiro y cerca del puente de las Animas habia abierto el Lic. la Llave: lo expuesto por los jueces competidores y por las partes en apoyo de la respectiva jurisdiccion, con lo pedido ante esta 1ª Sala por el Ministerio Fiscal: oido lo alegado ante la misma al tiempo de la vista por el C. Lic. José Mª de la Piedra en favor de la jurisdiccion del juez de Córdoba, y teniendo presente todo lo demas que convino: Considerando, en primer lugar: que en el presente caso no se trata de un juicio de propiedad ni de posesion de un terreno como perteneciente á la Federacion; sino solo del hecho de haber obstruídose por fuerza privada una zanja que, segun se refiere en el expediente, fué abierta para demarcar linderos; y considerando en segundo lugar: que por lo mismo solo aparece deducida en juicio una accion criminal por delito privado cuyo conocimiento pertenece á la jurisdiccion local, se decreta:

Primero: que el juez de 1ª instancia de Córdoba, es competente para conocer de la acusacion hecha ante él por el Lic. D. Francisco Mª de la Llave contra D. Joaquin Gallo y otros empleados de la Direccion del camino nacional de Amozoc á Veracruz que segaron una zanja abierta por aquel en el rancho del Záfiro cerca del puente de las Animas.

Segundo: que no hay condenacion de costas.

Tercero: que se remitan las actuaciones al juzgado de Córdoba con copia certificada de esta sentencia, remitiéndose copia igual al Juzgado de Distrito de Veracruz, para los efectos consiguientes; previniéndose al juez de Córdoba, mande reponer con arreglo á la ley el papel del sello respectivo que corresponde.

Cuarto: hágase saber y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron la 1ª Sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados-Unido Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*J. M. Lafragua.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.
Son copias. México, Junio 14 de 1872.
—*Lic. Agustín Peralta*, oficial mayor.

INCOMPETENCIA.—Excepcion interpuesta por el C. Lic. José N. Romero á un juez de lo Civil de Aguascalientes, y sentencia pronunciada por el juez de Distrito del Estado, sobre ella.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

Notificado al C. Gefe de Hacienda del Estado y dada vista con estas diligencias; dijo: que en la cuestion que motiva estos autos, nada tiene que hacer el fisco Federal, puesto que en los derechos que deduzcan las partes, ningun participio tiene la Federacion, que hiciera necesario el conocimiento de los Tribunales Federales.

Recibida la Sra. ex-religiosa Dª Manuela Asuncion Arteaga de la escritura que asegura su dote y hecha á ella la aplicacion de los réditos del capital, todo por orden del Ministerio de Hacienda, ha cesado hasta aquí el participio que en tal negocio tuvo la Federacion, y por lo mismo opina el que suscribe, que ese juzgado no puede avocarse el conocimiento de este asunto: sin embargo, ese referido juzgado determinará lo que á bien tenga. Firmó: damos fé.—*A. Cornejo.*

Es copia. Aguascalientes, Mayo 10 de 1872.—*A. Cornejo.*

SENTENCIA del C. juez de Distrito.

“Aguascalientes, veintisiete de Mayo de mil ochocientos setenta y dos.

El C. Lic. José N. Romero, como Apoderado general y sustituto del C. Francisco Flores Rincon (cuyo poder aparece agregado en este expediente,) se presentó ante este juzgado de Distrito el siete del actual, intentando, á nombre de su poderdante, el recurso extraordinario de competencia contra el juzgado Civil de 1ª instancia de este Partido y el Tribunal Superior del Estado, exponiendo para fundarlo, los siguientes hechos y alegaciones:

Manifiesta: que segun consta del documento que ha exhibido la Sra. religiosa exclaustrada Dª Mª Asuncion Arteaga, demandó en juicio civil ordinario, al C. Flores Rincon, reclamándole ante dicho juzgado la suma de siete mil pesos, valor del capital y réditos vencidos de la dote de aquella Señora, quien la recibió en virtud de la ley de 26 de Febrero de 1863 y sus concordantes, y que siendo tales disposiciones unas leyes generales de la Federacion, todas las controversias que se susciten sobre su cumplimiento y aplicacion, son de la exclusiva competencia de la jurisdiccion Federal, conforme á las fracciones 1ª y 3ª del artículo 97 del pacto Federativo de la República, ley Suprema sobre todas las leyes locales de los Estados; y que sin embargo, en este de Aguascalientes, los enunciados juzgado y Tribunal Superior, sobreponiéndose á esa Soberana disposicion nacional, se declararon ambos competentes, á apesar de haber el promoviente declinado jurisdiccion desde el momento que se demandó á su poderdante, insistiendo despues en su declinatoria en todas las instancias, procurando sostenerla en ellas por todos los medios legales que le fueron posibles; pero que no habiéndole valido estos, se le habia estrechado á interponer el presente recurso de competencia.

Con este, y las diligencias practicadas, se dió conocimiento al Ministerio público á fin de oirlo, en cumplimiento de la

ley vigente de 22 de Mayo de 1834, la cual ordena (artículo 40) se oiga la voz fiscal en todo juicio, cuando se interese la causa pública y la Nacion. El funcionario que hoy ejerce aquel Ministerio, al dársele vista del negocio, con el caracter de Gefe de Hacienda Federal en el Estado y desempeñando actualmente las funciones de Promotor, probó con breves, pero muy plausibles y victoriosas razones, esplayando los fundamentos de la ejecutoria controvertida: que ni la causa pública, ni el Erario Federal ni la Nacion tienen interes alguno en la cuestion judicial que se versa entre D. Francisco Flores Rincon y la Señora exclaustrada su acreedora. En consecuencia, el juez que suscribe, tomando en cuenta lo alegado y probado y en vista de las constancias respectiva,

Considerando: que la ley de 26 de Febrero de 1863 en su artículo 5º impone al Gobierno general la obligacion de que á las monjas exclaustradas que no hubieren recibido su correspondiente dote, se les entregue; tambien es tan cierto como evidente, que cumplió con este deber el Ejecutivo de la Union, respeto de la Señora Arteaga. El hecho de haberlo cumplido está plenamente justificado por la propia confesion de la parte que ha intentado la competencia, suponiendo la falta de la debida aplicacion y cumplimiento de aquella ley, pues el mismo Sr. Lic. Romero asegura, que la Señora Dª Asuncion apoyó su demanda en una escritura pública de hipoteca que le cedió el Supremo Gobierno, y en la orden respectiva del Ministerio de Hacienda para que le fuera entregada, siendo aquella valiosa de cuatro mil pesos, que con los réditos vencidos, suman la cantidad de los siete mil, cuyo pago reclama hoy á D. Francisco Flores la Señora interesada, quien hace bastante tiempo que con ese instrumento público se dió por recibida y satisfecha de la dote que le corresponde, y asegurada está.

Considerando: que despues de pruebas tan fehacientes y tan explicitas y categóricas explicaciones, los Tribunales de cuya jurisdiccion se declinó, se declararon con razon competentes y en pleno derecho, para conocer y proceder á la demanda de que se trata, por versarse la controversia judicial sobre bienes que han dejado ya de ser nacionales, y por lo mismo de ningun interes directo ó inmediato y de actualidad para el Erario Federal; siendo al presente de nuevo interes privado, controvertido entre particulares oriundos del Estado, y vecinos y residentes en esta Capital, en cuya jurisdiccion tienen sus bienes; recapacitando, pues, acerca del conjunto de tales circunstancias, se deduce incontestablemente, que no siendo tal negocio por su naturaleza del Fisco Federal, en razon de las personas y de las cosas, pertenece al fuero comun, y que por consiguiente la ejecutoria censurada, está en toda regla, aún cuando tenga por fundamento la ley de 29 de Noviembre de 1858, que aunque vicioso en un principio su origen, fué por decirlo así, posteriormente rehabilitada esa disposicion legislativa, habiendo sido adoptada por el Estado el cual la elevó al Supremo rango de ley, motivo muy legal para obedecerla y acatarla. En efecto, ella está en todo su vigor en el Estado, y estándolo y no pugnando con los principios constitutivos de la República, debe ser obedecida y respetada en su caso; y tanto mas, cuanto que no se ha dudado por nadie de su validez, ni aún por la misma parte que le pone la tacha de origen expúrio; supuesto que atendiendo á su calidad de disposicion local, la reconoce como vigente, segun puede verse casi al fin del ocurso que nos ocupa.

Ademas, los jueces no debemos calificar ni criticar las disposiciones legales, sino aplicarlas fiel y convenientemente y con la exactitud posible, por no sernos permitido á los juzgadores, por el dere-

cho, juzgar de las leyes sino conforme á ellas, aún cuando estas sean las locales de los Estados; porque de otro modo los jueces Federales hollaríamos la respectable autonomia de los Soberanos que componen la confederacion mexicana, declarándonos así en rebelion abierta contra el sistema Federativo y democrático, que ha cerca de medio siglo fué proclamado por la mayoría de la Nacion, rigiendo desde aquella época sus destinos.

Considerando, por último: que recapitulando cuanto se ha espuesto, á mas de resultar plenamente probado, que la sentencia que se disputa en nada compromete directa ó inmediatamente al Erario Federal, á la causa pública, ni tampoco algun otro interes nacional; que á mas de todo eso, tambien resulta, que no se ha suscitado en realidad ninguna verdadera controversia sobre la ley de 26 de Febrero de 1863, la cual en sustancia solo contiene la exclaustracion de las monjas y la entrega de su correspondiente dote, y en la presente contienda no se controvierte ni se ha controvertido por nadie si deben ó no exclaustrarse las religiosas y dotarse á las indotadas todavía; pues antes, ambas partes contendientes, hallan y controvierten en el sentido de dicha ley de 26 de Febrero; de suerte que como acaba de afirmarse, no hay controversia ninguna sobre esa ni sobre alguna otra ley general, y no habiéndola, no es competente para conocer este Juzgado y decidir acerca del juicio fenecido y ejecutoriado, que ha dado lugar á este recurso de competencia. Atendiendo, pues, á las consideraciones anteriores, el juez que suscribe, con arreglo á las fracciones 1ª y 3ª, artículo 97 de la Constitucion Federal, resuelve:

Que no es de admitirse ni se admite la competencia entablada por el C. Lic. José N. Romero, á nombre y en representacion del C. Francisco Flores Rincon. Notifiquese á la parte promovente,

lo mismo que al C. Promotor Fiscal para su conocimiento, y devuélvase original el poder con que aquella se presentó, por no tener ya objeto. El juez de Distrito del Estado, C. Lic. Luis G. Solana, así lo decretó y firmó: damos fé.—*Luis G. Solana.*—Asistencia.—*José María García.*—Asistencia.—*Arcadio Juárez.*

Es copia que certifico; actuando con testigos de asistencia por excusa del C. secretario.—Damos fé. *Luis G. Solana.*—*A. Hipólito Medina.*—*A. Arcadio Juárez.*

COMPETENCIA promovida por el Juzgado 2º de 1ª instancia de Veracruz, al 4º de 1ª instancia de Puebla, para conocer de la demanda entablada por el Lic. D. José Bautista contra D. Pedro Juan Velasco, sobre pago de honorarios.

PEDIMENTO DEL C. FISCAL.

El Fiscal dice: habiéndose promovido un juicio arbitral en la ciudad de Puebla, entre los Sres. D. Francisco Fernandez Policier y D. Pedro Juan Velasco, sobre rendición de cuentas de una recua, y en el que fué nombrado por árbitro el Lic. José María Bautista, su sentencia fué apelada, y el recurso ventilado ante el Tribunal Superior de aquel Estado. Mas como quiera que el Lic. Bautista, trató de cobrar judicialmente al Lic. Velasco, residente en Veracruz, la parte de costas que le tocaba satisfacer, ocurrió con este objeto al Juez 4º de Instrucción de Puebla para que exhortase á uno de los jueces de Veracruz, á fin de que por su conducto se requiriese de pago al Lic. Velasco. Practicado así, el Sr. Velasco declinó la jurisdicción del Juzgado de Puebla. Hizo mas, instó al de Veracruz, para que suscitara competencia al primero, la que sostenida por éste, y sustanciada en forma, ha sido elevada á esta primera Sala para la correspondiente resolución.

El Fiscal opina: que en el presente caso es de sostenerse con buenos fundamentos la jurisdicción del referido juez 4º de Instrucción de Puebla, y para convencerse de ello, basta fijarse en el informe rendido por dicho juez y obra á fojas 11 del Toca formado por esa Corte y que el Fiscal reproduce en todas sus partes; añadiendo que la misma equidad exige que se declare así, pues no sería justo y aún á la razón natural repugna, que á la persona que de buena fé prestó sus servicios en este negocio en cierto y determinado lugar, que procuró avenir á los interesados, evitándoles las molestias y gravámenes de un litigio largo y dispendioso, ahora, en recompensa de esas buenas acciones se le arranque de su domicilio para que vaya á litigar á un lugar distante, donde no se hallan los autos ni tampoco pueden ser remitidos por no estar terminados, y por último, ante jueces extraños que no tienen de ello ningún conocimiento.

Por todo lo expuesto, el Fiscal concluye con las siguientes proposiciones que sujeta á la deliberación de esa Sala.

Primera: se declara expedita la jurisdicción del juez 4º de Instrucción de Puebla, para seguir conociendo del incidente que sobre pago de costas devenidas como juez árbitro ha promovido el Lic. José María Bautista, al Lic. D. Pedro Juan de Velasco.

Segunda: devuélvanse las actuaciones al referido juez 4º de Puebla, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes: remítase copia igual al de 1ª instancia de lo civil del Canton de Veracruz: hágase saber, y archívese á su vez el Toca.

México, Mayo 16 de 1872.—*Altamirano.*

EJECUTORIA de la Suprema Corte de Justicia.

México, Mayo 31 de 1872.

Vista la competencia promovida por